

13a. REUNION - Continuación de la 6a. SESION ORDINARIA

JUNIO 14 DE 1915

PRESIDENCIA DEL SR. D. ALEJANDRO CARBO
Y DEL DR. D. MANUEL MORA Y ARAUJO

MINISTROS PRESENTES:

de obras públicas, doctor Manuel Moyano

DIPUTADOS PRESENTES:

Acosta, Aguirre (D.), Aguirre (R. M.), Albarracín, Aldao, Alvea, Araya (P.), Araya (R.), Arce, Ateneto, Avellaneda (M. A.), Avellaneda (N. A.), del Barco, Barrera Bas, Beltrán, Bonastre, Borda, Bravo, Cabanillas, Cafferata, Cantilo, Ceballos, Castillo, Corrado, Costa, Cúneo, Demarehi, Demaría, Diekmann, Echagüe, Elgaray, Escobar, Frugoni Zavala, Gallo, Gandolla, García, Giménez, Hernández, Iturbe, Jaramillo, Justo, Lagos (O. A.), Le Bretón, Leguizamón, Linares, López Buchardo, Marcó, Marcó, Márquez, Massa, Melo, Milura, Mora y Araujo, Noriega, Nougues, Oliver, Olinda, Oyhanarte, Padilla, Palacios, Paz, Pereyra Traola, Pérez Virasoro, Pesenti, Tinoco, Rodón Reibel, Repetto, Roca, Rojas, Rolón, Saavedra Lamas, Sagüer, Sánchez Viamonte, Santamarina, Santillán, Saravia, Semprún, de Tenasco, de la Torre, Urburu, Valdez, del Valle, Varela, de Vedia, Veyga, Zaccagnini, Zaballus (E. S.)

DIPUTADOS AUSENTES:

Con aviso:

Canaño, Castellanos, Cevallos, Correa, Drago, Frers, Funes (Limaury), Funes (Lucio), Garzón, González Pérez, Igarzábal, Jerez, Mariño, Mena, Ordóñez, Ota, Zavalla Guzmán

Sin aviso:

Arancibia Rodríguez, Bejarano, Beresche, Mercado, Morán, Paiz, Pastor, Ratto, Sales Oroño, Salvatierra, Silvetti, Vergara

SUMARIO

- 1.—Mensaje del poder ejecutivo en contestación a la minuta sancionada por la honorable cámara relativa a la **reparación del edificio ocupado por la escuela normal de profesoras de La Plata.**
- 2.—El señor intendente municipal de la Capital invita a los señores diputados a presenciar la **inauguración** de la estatua de don Juan de Garay.
- 3.—**Peticiones particulares**
- 4.—El señor diputado Luis Linares presenta su **renuncia** de miembro de la comisión de estudios de legislación ferroviaria.
- 5.—Proyecto de minuta de comunicación

al poder ejecutivo, del señor diputado Leopoldo Melo y otros, relativa a la **circulación de los trenes en la provincia de Entre Ríos.**

- 6.—Proyecto de ley del señor diputado Alfredo L. Palacios sobre **represión del alcoholismo.**
- 7.—Proyecto de ley del señor diputado Alfredo L. Palacios derogando las leyes de **residencia y de seguridad social.**
- 8.—Proyecto de ley del señor diputado Gerónimo del Barco sobre **organización del cuerpo diplomático y consular.**
- 9.—Proyecto de ley del señor diputado José Arce y otros creando **una es**

Reunión núm. 13

CAMARA DE DIPUTADOS

Junio 14 de 1915

escuela normal mixta en la ciudad de Tres Arroyos.

10.—Proyecto de ley del señor diputado Nicolás Repetto sobre **jornada máxima y salario mínimo** y prohibiendo la importación y uso de **pinturas a base de plomo.**

11.—Proyecto de ley del señor diputado Juan B. Justo y otros rebajando los **derechos de importación al azúcar.**

12.—Proyecto de minuta de comunicación al poder ejecutivo del señor diputado Juan J. Atencio relativo a **accidentes ferroviarios.**

13.—Proyecto de ley del señor diputado Juan F. Cafferata sobre **represión del alcoholismo.**

14.—Despacho de las comisiones.

15.—Se resuelve considerar con preferencia el despacho de la comisión de presupuesto en el proyecto de ley del señor diputado Miguel M. Padilla y otros, aumentando una cátedra de **ciencias y letras en varios colegios nacionales.**

16.—Consideración del asunto a que se refiere el número anterior.

17.—Incidencias.

18.—Consideración del despacho de la comisión de legislación en el proyecto de ley en segunda revisión sobre **jubilación de empleados ferroviarios.**

—En Buenos Aires, a 14 de junio de 1915, a las 3 y 45 p. m., dice el

Sr. Presidente. — Continúa la sesión con 62 señores diputados.

Se va a dar cuenta de los asuntos tratados.

1

REPARACION DEL EDIFICIO DE LA ESCUELA NORMAL DE PROFESORAS DE LA PLATA.

Buenos Aires, 8 de junio de 1915.

Al señor presidente de la honorable cámara de diputados de la nación.

Tengo el honor de dirigirme al señor presidente pidiéndole recibo de la minuta sancionada por la honorable cámara en la sesión de fecha 21 de mayo, relativa a la ejecución de obras de reparación en el edificio que ocupa la escuela normal de La Plata.

En respuesta compléme manifestar al señor presidente que el concejo nacional de educación ha resuelto ya llevar a cabo las obras mencionadas, destinando para el objeto la suma de pesos 15.191,36 moneda nacional.

Saludo al señor presidente con mi más distinguida consideración.

V. DE LA PLAZA
TOMAS R. CULLEN

— Al archivo.

2

INVITACION

Buenos Aires, junio 10 de 1915.

Excelentísimo señor presidente.

Tengo el honor de dirigirme a V. E. y, por su intermedio a los señores miembros de esa honorable cámara de diputados, para invitarlos a honrar con su presencia la solemne inauguración del monumento a don Juan de Garay, fundador de la ciudad de Buenos Aires.

Días quince al señor presidente.

ARTURO GRAMATO
E. Raúl Quiroz.

— Al archivo.

3

PETICIONES PARTICULARES

— Héctor Zaldarriaga, reitera su pedido de prórroga de concesión para construir la línea férrea de Riacho a San Nicolás. — *(A la comisión de obras públicas.)*

— Lorenzo Winter, general de división, solicita se le acuerde el grado inmediato superior. — *(A la comisión de guerra.)*

— Ciro Quiroga hace observaciones al proyecto reglamentario del ejercicio de la ingeniería, arquitectura y agrimensura. — *(A sus antecedentes.)*

— Matilde Lavalle de Robertson, solicita un premio en tierras. — *(A la comisión de guerra.)*

— La comisión de damas católicas solicita un subsidio. — *(A la comisión de presupuesto.)*

— Santiago Brian, por la empresa del ferrocarril del oeste, reitera la solicitud de prolongación de la línea de Colonia Alvear hasta Colonia Bouquet. — *(A la comisión de obras públicas.)*

— Juan José Somoza solicita reconocimiento del grado de coronel del ejército. — *(A la comisión de guerra.)*

— La biblioteca popular de San Bernardo solicita un subsidio. — *(A la comisión de presupuesto.)*

— La asociación de maestros de la provincia de San Juan solicita un subsidio. — *(A la comisión de presupuesto.)*

— La sociedad de beneficencia de Santa Rosa de Teays (La Pampa), solicita un subsidio. — *(A la comisión de presupuesto.)*

SOLICITUDES DE AYUDAS

— Juan Pastorini y José Azémar. — *(A la comisión de peticiones.)*

SOLICITUDES DE PENSIONES

Emilio Castel de Azeke, Gregorio C. de Radmil, Mercedes L. de Veinango, Teresa J. Mallo,undo, Esteban Pérez Garbí, Genoveva González

reprodujo su proyecto sobre prohibición de la importación de pinturas a base de plomo, me pareció desprenderse de sus palabras que la comisión de legislación no había tomado en consideración este asunto. Yo no hice la aclaración en el momento oportuno, porque no tenía los datos en mi poder, pero los he solicitado del encargado de la comisión y quiero manifestarle al señor diputado que la comisión me encargó a mí, como único profesional médico de ella, que estudiara ese asunto. Por mi indicación se elevó a informe de la oficina química nacional con fecha julio de 1914 y el director de la oficina química nacional ha producido un extenso informe de sesenta páginas, que yo no he tenido tiempo de leer, a propósito del proyecto del señor diputado. Ese informe fué elevado al ministerio de hacienda y el ministerio de hacienda recién con fecha 14 de mayo del corriente año lo ha devuelto a la comisión de legislación. De modo que la comisión no es culpable de que este asunto no haya podido ser despachado.

La comisión se ha ocupado de él con preferencia y yo he sido el encargado de hacer el estudio del caso. Quiero hacer esta aclaración en descargo de la comisión y en descargo mío.

18

JUBILACION DE FERROVIARIOS

Sr. Presidente. — Se continuará con la orden del día.

Tiene la palabra el señor diputado Dickmann.

Sr. Dickmann. — Solicité la palabra en la última sesión para ocuparme del importante asunto de la jubilación de los ferroviarios; pero como también por indicación mía la honorable cámara resolvió invitar al señor ministro de obras públicas a concurrir a su seno, a fin de que nos hiciera conocer la opinión del poder ejecutivo sobre las modificaciones introducidas por el honorable senado al primitivo proyecto votado por la honorable cámara de diputados, yo gustoso cedo la palabra al señor ministro de obras públicas, para conocer la opinión del poder ejecutivo sobre estas modificaciones.

Sr. Presidente. — ¿El señor diputado no va a hacer uso de la palabra?

Sr. Dickmann. — Después de que use de ella el señor ministro.

Sr. Presidente. — Es que el señor ministro no ha pedido la palabra.

Sr. Dickmann. — Tal vez desee hablar; ahora, si no desea hablar, hablaré yo.

Sr. Presidente. — El señor ministro se encuentra en antecámara esperando que la cámara se ocupe del asunto que está a la orden del día.

Sr. Dickmann. — Si el señor ministro no quiere hacer uso de la palabra...

Sr. Padilla. — No se le ha invitado al señor ministro todavía.

Sr. Presidente. — El señor ministro hace dos horas que espera que la cámara se ocupe del asunto.

Sr. Berra. — Me parece que ya estamos en el asunto.

Sr. Padilla. — Entonces debe comenzar a por invitarlo.

Sr. Dickmann. — Por eso gustoso cedo la palabra al señor ministro.

Sr. Zaccagnini. — Es un acto de deferencia.

— Ocupa su asiento en el recinto el señor ministro de obras públicas.

Sr. Presidente. — El señor diputado por la capital, doctor Dickmann, había pedido la palabra; pero manifestó que si el señor ministro quiere hacer uso de ella, él cede su turno.

Sr. Dickmann. — Para conocer la opinión del poder ejecutivo sobre las modificaciones introducidas por el honorable senado en el despacho primitivo de la cámara de diputados.

Sr. Ministro de Obras Públicas. — ¿Es d'ferencia del señor diputado?

Sr. Dickmann. — Deseo que el señor ministro informe, en nombre del poder ejecutivo, antes de que yo haga uso de la palabra, si es que no tiene inconveniente.

Sr. Ministro de Obras Públicas. — No tengo inconveniente.

Pido la palabra, señor presidente.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor ministro.

Sr. Ministro de Obras Públicas. — Voy a ser breve, señor presidente, porque el poder ejecutivo ha colaborado reueta y eficazmente en el proyec-

to de ley sobre jubilación de los ferroviarios, en su estudio y en su sanción, tanto en esta honorable cámara como en el honorable senado. El señor Ramos Mejía y el doctor Meyer Pellegrini, ministros de obras públicas en su tiempo, le prestaron el concurso más decidido, llevando sus conocimientos claros y completos del asunto y los prestigios de su palabra a las prolongadas deliberaciones, en uno y otro cuerpo legislativo, y hasta podría decirse sin exagerar que el tema quedó agotado en los múltiples aspectos en que fué controvertido.

El poder ejecutivo entendía que hacía obra buena, plausible y patriótica, adhiriendo a la iniciativa de la honorable cámara acerca de la jubilación de los ferroviarios, porque, a su juicio, el proyecto aseguraba, consolidaba y mejoraba el servicio de todos los ferrocarriles del país, que son el eje, —me permitirá la cámara que lo repita,— de la riqueza, el eje de todos los elementos de actividad social. Entendiendo el poder ejecutivo que ese proyecto asegura la conservación de los empleados ferroviarios, garantiéndoles su porvenir para las horas de cansancio, de enfermedad o aquellas en que el obrero necesita del concurso de su principal.

La sanción favorable acordada por ambas cámaras al pensamiento fundamental demuestra que la creencia del poder ejecutivo era perfectamente justificada.

De ahí se sigue que nada puede agregarse de parte del poder ejecutivo a lo que ha dicho antes en relación a este asunto, si no fuera que han variado tanto las circunstancias económicas de la Nación, como lo saben los señores diputados, que ha variado tanto la situación de las empresas y la situación individual de los empleados...

Sr. de Tomaso. — Y que ha variado el proyecto de ley mismo, señor ministro. Estamos discutiendo ahora una cosa distinta.

Sr. Bravo. — Y que ha variado el ministerio también, señor ministro...

Sr. Presidente. — Sírvanse no interrumpir los señores diputados.

Sr. Ministro de Obras Públicas. — ¿Quiere tomarse la molestia de repetir el señor diputado, porque me ha sido imposible oírle?

Sr. de Tomaso. — Digo que ha variado el texto que estamos discutiendo,

porque el proyecto venido en revisión del senado modifica el anterior de una manera tan fundamental, que bien puede y debe el poder ejecutivo expresar una opinión sobre él.

Sr. Ministro de Obras Públicas. — Si el señor diputado tiene la paciencia de escuchar mi breve exposición juzgará de la oportunidad de su observación.

Sr. de Tomaso. — Muy bien, señor ministro. Como empezaba por adelantar...

Sr. Presidente. — Sírvasse no interrumpir el señor diputado.

Sr. Ministro de Obras Públicas. — El poder ejecutivo no desea absolutamente, señor diputado — y lo digo para evitar otra interrupción inmediata — formular observaciones al despacho. Invitado para asistir a este debate, el poder ejecutivo cumple con el deber de llamar la atención de la honorable cámara en el sentido apuntado, al perjuicio de reconocer, como es natural, que a ella le corresponde decidir con su juicio sereno y prudente, la suerte que debe tener el proyecto de su iniciativa.

El fondo de la idea de jubilación se forma, como es sabido, con el concurso que le prestan los obreros e, en parte, las empresas y la producción general mediante un aumento en la tarifas. Si es indudable que este organismo fué encontrado razonable y prudente en el momento inicial de la idea no puede dudarse, por razones que todo el mundo conoce, que en las circunstancias actuales esos elementos obedeciendo a factores que pesan sobre todos, no se encuentran en las mismas condiciones que en aquella época.

No hago una afirmación arbitraria, me remito a lo que todo el mundo conoce. No desprende esta afirmación como una consecuencia lógica de la situación en que está el mercado mundial, que necesariamente refleja sobre nuestro mercado, sino que este es el eco que llega, no al poder ejecutivo sino a todas partes y a todos los ámbitos del país de parte de los inmediatamente interesados en la solución del problema de la jubilación.

Por lo que se refiere a los obreros al personal en general de los ferrocarriles, es sabido que el trabajo ha disminuído, porque ha disminuído el tráfico general de las empresas. Habiendo disminuído el trabajo, se ha

hecho un prorrateo o distribución de trabajo entre los obreros, lo que acusa una reducción de jornales. Es una limitación de las entradas, a cuya circunstancia se agrega la mayor carestía de la vida para el obrero y para todos los que de él dependen.

En cuanto a las empresas, es cuestión de números, honorable cámara, malgrado todas las afirmaciones en contrario, es cuestión de contabilidad. Ellas han disminuído de tal manera sus entradas, que algunas no pueden siquiera servir cumplidamente sus obligaciones, no ya su capital ordinario; no podrían tampoco resistir actualmente exigencias de concurso para caja de jubilaciones, como lo hicieron en su hora.

En cuanto a tarifas, ¿para qué detenerme a decir que no es posible aumentos, cuando la cámara en cada sesión resuelve encomendar al poder ejecutivo la mayor diligencia posible ante las empresas para que introduzcan rebajas en los transportes?

Yo he traído a la sesión dos planillas, que complementan la que se sirvió presentar el señor diputado Palacios en la última sesión: y la complementa en el sentido de establecer no sólo las entradas de las compañías, el aumento de sus recorridos, sus gastos de explotación, etcétera, sino también sus utilidades y la diferencia, la pérdida, diré, que tienen en este último ejercicio en relación a los anteriores. Me parece que no sería práctico distraer la atención de la honorable cámara con la lectura de estas planillas, y rogaría se me permitiera insertarlas en el diario de sesiones. (1) Repito que son sencillamente, complementarias de las que se sirvió presentar el señor diputado, doctor Palacios.

Yo digo, en síntesis, señor presidente, después de esto, que el poder ejecutivo no se opone, no puede oponerse en manera alguna a la ley tan reclamada por una parte del personal de los ferrocarriles, por el honorable congreso, y aun por las empresas; pero entiende el poder ejecutivo que la postergación para un momento más propicio sería muy ventajosa: sería hacer la ley con eficacia y con ponderación, para imponerla con éxito en sus finalidades previstas o calculadas.

Sr. Bas. — Yo desearía hacer algu-

na pregunta al señor ministro con el consentimiento del mismo.

Sr. Ministro de Obras Públicas. — Sin inconveniente.

Sr. Bas. — Como en este momento lo que la cámara discute son las modificaciones introducidas por el honorable senado, lo que yo deseo, y creo que la cámara tiene el derecho a exigir, es que el señor ministro, dadas las palabras que ha expresado, funde a nombre del presidente de la Nación una moción de postergación de este asunto, que sería lo que corresponde, para poder discutirla.

Sr. Bravo. — Es evidente que el señor ministro no está aquí en representación propia: es el poder ejecutivo.

Sr. Bas. — Hablo en esta forma dado lo que sucediera ya otra vez en la comisión de legislación: que el señor ministro trajo las opiniones propias, que no eran, en realidad, las del poder ejecutivo. Por eso me veo obligado en este caso a reclamar una declaración categórica en ese sentido.

Sr. Bravo. — El señor ministro no puede hablar en la cámara sino a nombre del poder ejecutivo.

Sr. Ministro de Obras Públicas. — Así es.

Sr. Presidente. — El señor diputado quiere que el señor ministro precise, y ya ha manifestado el señor ministro que habla en nombre del poder ejecutivo.

Sr. Bonastre. — Desde luego, no puede venir sino en ese carácter.

Sr. Ministro de Obras Públicas. — Si me permite el señor presidente, voy a continuar con la palabra, extrañando que un parlamentarista como el señor diputado Bas se haya colocado en un terreno tan falso.

Sr. Bas. — Muchas gracias, pero ¿qué quiere! Los antecedentes mencionados de la comisión de legislación me obligan a ello.

Sr. Ministro de Obras Públicas. — No lo habilitan al señor diputado para traer a la cámara...

Sr. Bas. — Es cuestión de opiniones, señor ministro.

Sr. Ministro de Obras Públicas. — Creo que está en error el señor diputado.

(1) Véase la página 462.

Sr. Bas. — Yo creo que el señor ministro.

Sr. Ministro de Obras Públicas. — Lo dirá la opinión que nos escucha, señor diputado.

He dicho con toda claridad que entiendo que una iniciativa de la cámara no es susceptible de un pedido de postergación por parte del poder ejecutivo.

Sr. Bas. — Es un error.

Sr. Presidente. — Permítame el señor diputado. El señor ministro tiene la palabra.

Sr. Bas. — Muy bien, señor presidente.

Sr. Ministro de Obras Públicas. — El poder ejecutivo establece clara y perentoriamente que cree que es la cámara la que debe resolver la suerte de su iniciativa. El poder ejecutivo se limita a indicar lo que, en su concepto, fundaría una moción de postergación de este asunto por parte de uno de los miembros de esta cámara.

Sr. Bas. — ¿Pero no lo hace el poder ejecutivo?

Sr. Ministro de Obras Públicas. — El poder ejecutivo no lo hace.

Sr. Bas. — Entonces, no hay nada en discusión a ese respecto.

Sr. Presidente. — Permítame el señor diputado. Tiene la palabra el señor ministro para informar.

Sr. Ministro de Obras Públicas. — Como he dicho, señor presidente, voy a continuar dando la opinión que ha pedido al poder ejecutivo el señor diputado que solicitara mi presencia en este debate, respecto del artículo 11 del proyecto.

Ha sido ya emitida prolijamente por el señor doctor Meyer Pellegrini, ex ministro de obras públicas, en la discusión que tuvo lugar en el senado.

Sr. Dickmann. — ¿Es la actual opinión del poder ejecutivo, señor ministro?

Sr. Ministro de Obras Públicas. — No ha podido esperarse que un cambio en el personal del ministerio pudiera modificar la opinión del poder ejecutivo en un asunto de esta naturaleza.

Para satisfacer la exigencia tan perentoriamente formulada por el señor diputado, la cámara me ha de permitir la lectura de dos párrafos de aquella

exposición, concisos y breves, pero explícitos, para no detenerla más tiempo del necesario. Decía el señor doctor Meyer Pellegrini: "Muchas y variadas razones militan en favor de la sanción de este proyecto: el funcionamiento especial de los ferrocarriles, su importancia decisiva en el desarrollo económico del país, hacen de él un instrumento principal del progreso, un elemento indispensable para que pueda moverse el complicado organismo de la actividad nacional. El servicio que prestan es tan indispensable para la vida de la Nación, que no puede dudarse un instante que existe alto interés de estado en asegurar su permanencia y regularidad. Pero al mismo tiempo que el estado tiene interés y derecho en asegurar el funcionamiento regular y permanente de sus servicios, tiene a su vez la obligación de tomar las medidas necesarias para que dicho objetivo pueda ser alcanzado".

Y luego, cuando se trató expresamente del artículo 11, presentado a la honorable cámara de senadores por el señor senador Macías, agregó el ex ministro: "La exposición del señor senador me pone en el caso de dar en forma concisa las razones que mueven al ejecutivo a adherir en los términos más absolutos al pensamiento que encierra la modificación".

De suerte que, como se ve, el poder ejecutivo, con fundamentos extensos que se encuentra en el diario de sesiones y que el señor diputado leerá sin duda con interés...

Sr. Dickmann. — Conozco la opinión del ex ministro Meyer Pellegrini, señor ministro.

Sr. Ministro de Obras Públicas. — ...adhiere al artículo 11 y a todos los demás artículos del proyecto; y yo cumplo el deber de ratificar esa actitud y esas opiniones emitidas en aquel entonces.

Es esto lo que tenía que decir a la honorable cámara.

Sr. Dickmann. — Dado la palabra.

Confieso, señor presidente, que el señor ministro de obras públicas no ha contestado las preguntas que yo le he formulado.

He preguntado al señor ministro cuál era...

Sr. Ministro de Obras Públicas. — Me permito observar que no he venido a contestar preguntas; he sido

invitado a tomar parte en el debate en la forma habitual.

Sr. Dickmann. — Se trata de un asunto que interesa al señor ministro especialmente, y puede y debe contestar algunas preguntas de los diputados. Así, en este sentido...

Sr. Ministro de Obras Públicas. — Creo que está equivocado: no he venido a contestar preguntas.

Sr. Dickmann. — ...creo que no es parlamentaria la actitud del señor ministro.

El señor ministro no me ha ilustrado mayormente. Ha traído a colación cosas fuera del debate y una insinuación de aplazamiento, que no la formula el poder ejecutivo, pero que el señor ministro insinúa en el seno de la honorable cámara...

Si los diputados socialistas damos tanta importancia a la discusión de esta ley, es porque creemos que el tema no está agotado, como acaba de decirlo el señor ministro de obras públicas. El tema está planteado recién en sus términos categóricos: están en discusión grandes principios teóricos y fundamentales, intereses prácticos de un numerosísimo gremio, que es indispensable aclarar y dilucidar.

Pero antes de entrar en materia, permítaseme hacer una pequeñísima digresión de orden personal.

A propósito de dos últimos debates, el relativo a distribución de semillas a los colonos y el iniciado sobre la ley de jubilación de ferroviarios, dos diputados radicales han comparado a los diputados socialistas con las mujeres. Molestado un poco por esa comparación, he querido aclararla hoy, antes de entrar en la discusión sobre el proyecto de ferroviarios.

Debo declarar, señor presidente, que si la comparación de los diputados socialistas con las mujeres es desde el punto de vista social, la agradecemos y aceptamos complacidos. Mujeres son nuestras madres, mujeres son nuestras hermanas, nuestras novias, nuestras esposas, nuestras hijas. La lealtad, la laboriosidad y el afecto de las mujeres, si se nos compara con ellas, nos estimula y complace sobremanera. Para ellas pedimos todos los derechos civiles y reivindicamos todas las libertades sociales.

Pero si la comparación es del punto de vista biológico (risas) no quiero inferir el agravio, sobre todo al señor di-

putado Araya, de invitarlo a una demostración experimental (*hilaridad general*), para que se convenza de que no vestimos colleras sino pantalones, y que si repudiamos el duelo, no repudiaremos, llegado el caso, el pugilato personal.

Ya salen los señores diputados que somos varones, en el más amplio sentido de la palabra.

Sr. Araya (R.). — Señor presidente: quiero decir que cuando he hecho esta observación, no he querido cambiarles el sexo a los diputados socialistas.

Sr. Presidente. — Ruego al señor diputado que tenga presente que se discuten las modificaciones introducidas por el honorable senado a la ley de jubilación de ferroviarios.

Sr. Dickmann. — Entro al asunto señor presidente.

Sr. Araya (R.). — No acepto la prueba experimental que me propone el señor diputado Dickmann, porque como mujer sería desastrosamente fea. (*Risas.*)

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor diputado Dickmann.

Sr. Dickmann. — El señor diputado Bas ha afirmado en su informe, en nombre de la mayoría de la comisión, que él entendía que las modificaciones introducidas por el honorable senado, no afectan fundamentalmente el concepto de la sanción originaria de la cámara.

No podemos aceptar esta afirmación del señor diputado Bas, porque estamos persuadidos de que las modificaciones introducidas por el honorable senado son fundamentales. Más: debo declarar, para que lo sepa el numeroso gremio de obreros y empleados de ferrocarriles, que en realidad la honorable cámara no discute una ley de pensiones, que lo que discute es una promesa de ley; y no deben hacerse la ilusión los obreros si se sancionara esta ley, de que en seguida disfrutarán de la pensión tan anhelada. No se les ofrece nada inmediato con esta ley. Ella promete que se va a dictar algún día una ley de pensiones; y como por otra parte la honorable cámara no puede ni debe comprometer la opinión de la futura cámara de diputados, en realidad lo que se discute, es simplemente una promesa de ley. Pero, aún si discutiéramos la ley de pensiones, sostengo y

afirmo que es una ley defectuosa, insuficiente, incompleta, que en cambio de una hipotética y futura jubilación, desde ya quita a los obreros un derecho fundamental.

Y a propósito de leyes, es necesario convenir en que más vale esperar que se dicte una buena ley y no apresurarse a dictar una ley defectuosa, porque las leyes una vez dictadas son muy difíciles de modificar; mientras que si no se dictan, es fácil discutir, dilucidar y dictar una completa, que resuma toda la legislación moderna sobre el asunto.

Nosotros, los diputados socialistas, no deseamos que se dicte "cualquier ley", que se votaría por complacencia, concesión u obligación, pues sabemos que aún dictadas las leyes y siendo ellas buenas, pueden estar muy lejos de ser cumplidas, porque si el poder ejecutivo no las cumple, es decir, no quiere aplicarlas, como sucede con la ley del descanso dominical y la del trabajo de las mujeres y los niños, evidentemente las mejores leyes no sirven para nada.

Para comprender bien todos los intereses comprometidos en este asunto, es necesario, señor presidente, conocer la composición de los gremios de los obreros y empleados ferroviarios. Y entonces se verá claramente que aun dentro de un mismo gremio, los intereses son distintos y a veces completamente antagónicos.

El gremio de ferroviarios, comprendido en esta ley, abarca desde el empleado más encumbrado hasta el peón más humilde. Es sabido que la ley incluye jubilaciones hasta de mil pesos de sueldo mensual, defecto grave del proyecto, porque se ha entendido siempre en las leyes sociales que el seguro se vota para aquellos hombres que se supone que en sus largos años de trabajo no pueden ahorrar, no deben ahorrar sobre su salario, casi siempre insuficiente, y entonces el estado, la colectividad, procuran asegurarles una vejez tranquila, para que no se vean en el caso de recurrir a la caridad pública. No se comprende, entonces, que en una ley social se incluyan altos empleados, altos funcionarios, porque se supone que en sus largos años de empleo muy bien remunerado deben y pueden ahorrar sobre sus sueldos, para no necesitar el socorro social. Es, pues, un defecto de este proyecto que incluye a todos los empleados de los ferro-

carriles; y al hacerlo crea antagonismos en el mismo gremio de ferroviarios y eso explica la distinta actitud asumida por muchos empleados frente a esta promesa de ley.

En los ferrocarriles hay distintas categorías de empleados. Los altos funcionarios que están vinculados directamente a los intereses financieros de las empresas, son aliados naturales de los capitalistas. Estos altos empleados están siempre en contra de la masa obrera asalariada de los ferrocarriles. Además, forma parte de este gremio un importante grupo de obreros, maquinistas y foguistas, que en realidad son, puede decirse, la fuerza motriz de los ferrocarriles; dos gremios muy importantes, difícilmente sustituibles. Ellos mismos comprenden perfectamente su alta misión social, su enorme responsabilidad, están desde hace años organizados en una sociedad poderosa; y gracias a esta organización han logrado muchas veces detener y paralizar muchos abusos de las empresas ferroviarias y tal vez muchas complicidades del poder ejecutivo con el capital extranjero.

Tenemos en seguida formando parte del gremio de ferroviarios, una numerosa categoría de empleados que podríamos llamar "sin calificación", empleados que pueden ser fácilmente reemplazados y a los que, por eso mismo, les ha sido difícil organizarse.

Ya ven los señores diputados las distintas categorías de empleados, diversidad de la que derivan, naturalmente, intereses distintos y contrapuestos. Es así como los altos funcionarios desean que se sancione esta ley y desean vehementemente que se incluya el artículo 11. Los numerosos empleados sin calificación no opinan sobre el asunto porque no están organizados, y frente a todos ellos está la poderosa organización de los maquinistas y foguistas, que públicamente, por un plebiscito hecho en todo el país, se han manifestado en contra del artículo 11, que, como veremos luego, es atentatorio a los derechos más elementales de la clase trabajadora, reconocidos en el mundo entero.

Decía el señor diputado Bas en su exposición que el artículo 11 no calificaba de delito a la huelga, que ni siquiera la castiga, y agregaba que es una simple cláusula que se desprende del contrato de trabajo.

Decía textualmente el señor diputado

Bas: "Como habrá notado la honorable cámara, en dicha disposición no se ha calificado como delito ni mucho menos el hecho del abandono individual o colectivo del servicio (huelga) y que ni se establece penalidad para la última". Y más adelante habla de "la cesación voluntaria del contrato de trabajo."

El señor diputado Bas parte de un punto de vista completamente erróneo: el señor diputado habla de "contrato de trabajo", y yo niego que entre los obreros y los patrones haya un verdadero contrato de trabajo.

Contrato — y yo no soy jurista: soy un hombre de buen sentido — contrato significa la relación entre dos partes de iguales derechos e iguales deberes, entre dos partes contratantes que son idénticas ante el hecho real. Niego que entre la clase obrera que vende su fuerza de trabajo y la clase capitalista que compra esa fuerza de trabajo haya ninguna igualdad jurídica ni contrato: apenas hay un simple "trato" de trabajo. Y eso allí donde los obreros están organizados, porque donde no lo están, ni siquiera hay "trato" de trabajo. Obligados por sus necesidades primordiales, las clases obreras se entregan atadas de manos y pies a los que quieren comprar sus brazos: no hay, pues, tal contrato de trabajo. Hay una enorme diferencia de derecho entre los que poseen el capital y los instrumentos de trabajo y los que no tienen más que sus brazos.

De tal modo, señor diputado Bas, que no se puede hablar de "contrato de trabajo".

El único derecho que le queda a la clase obrera frente a la prepotencia de las empresas es el derecho de la huelga, que si no está legislado, está implícitamente reconocido en todos los países civilizados.

Sr. Bas. — ¿Me permite una interrupción el señor diputado?

Sr. Dickmann. — Sí, señor diputado.

Sr. Bas. — Con el permiso de la presidencia.

Creo que es interesante dejar bien precisado este concepto que acaba de expresar el señor diputado respecto al "contrato de trabajo".

Es perfectamente lógica su argumentación del criterio de *partido de clase* con que él analiza la cuestión.

Sr. Dickmann. — No hay otro criterio, señor diputado.

Sr. Bas. — La argumentación del señor diputado no es una novedad dentro de la teoría socialista: la ha sostenido Jaurés repetidas veces en el parlamento francés, estableciendo que entre patrón y obrero no existe contrato alguno, que se trata simplemente de situaciones completamente unilaterales: el patrón obligado a cumplir con el obrero todos los compromisos que ha contraído respecto al trabajo y el obrero sin obligación de ninguna clase con respecto al patrón relativa al contrato realizado.

Sr. Dickmann. — Si el señor diputado desea rectificarme ahora, no se lo permito. Una interrupción, sí.

Sr. Bas. — Dos palabras más, solamente.

Sr. Dickmann. — Tendré el mayor gusto en oírlo después.

Sr. Bas. — Sólo voy a agregar dos palabras.

Ha hecho bien el señor diputado en declarar que no era jurisconsulto, porque francamente si lo hubiera sido habría resultado por cierto más lamentable la afirmación que nos ha hecho de que para que puedan considerarse válidas las obligaciones relativas a un contrato es preciso que exista una absoluta igualdad entre las dos partes contratantes. Con tal criterio tendríamos que todas las obligaciones actuales, en todos los contratos, sean de locación de servicios de un enfermo respecto al médico, de un cliente respecto a su abogado, y, en fin, para no enumerarlos, absolutamente en todos ellos, ya que sirven precisamente para complementar en los hombres esas diferencias de situación, serían absolutamente nulas.

Ante el criterio del partido de clase, que es también el del señor diputado, no se concibe la existencia de esa doble relación. Estudiada y analizada la cuestión dentro del concepto unilateral del partido socialista, reclama todos los derechos, sin reconocer absolutamente las obligaciones.

Por lo demás, esa cuestión ha sido estudiada y resuelta de una manera precisa en el parlamento francés, con la colaboración de hombres eminentes de indiscutible autoridad para el señor diputado, como Clemenceau, Millerand y otros, al discutirse la ley francesa de 1908, relativa precisamente a los empleados ferroviarios, se estableció, de una manera categórica, el

principio de que había allí obligaciones correlativas de los patronos y de los obreros; y que si estos últimos tenían el derecho de declararse en huelga sin incurrir en penalidad, como lo establecen otros países, en cambio la obligación correlativa daba a los patronos una doble facultad: la de expulsión de los obreros por causa de huelga inmotivada e ilegítima y, en segundo lugar, el derecho a reclamar daños y perjuicios como consecuencia del abandono inmotivado e injustificado del trabajo.

Nada más, para aclarar un concepto que era fundamental y sobre el que no debía quedar duda de ninguna especie en el espíritu de la honorable cámara y de los demás señores que escuchan las deliberaciones.

Sr. Dickmann. — Sin duda alguna, yo hablo bajo el punto de vista del partido socialista.

Sr. Bas. — Debe hablar como legislador argentino.

Sr. Dickmann. — Como legislador argentino y socialista.

Sr. Bas. — Dentro de los principios que el derecho establece.

Sr. Dickmann. — Como defensor de una clase social determinada, porque sería inadmisibile hablar aquí en nombre de todo el pueblo. El hecho mismo de traer aquí la ley de protección para los obreros de los ferrocarriles, reconoce la existencia de clases sociales, porque supongo que no se pretende votar una ley de seguros para los rentistas, por ejemplo.

Sr. Bas. — Y que se discute en una concordancia absoluta con las empresas, porque precisamente se insiste en la sanción del artículo que dará por resultado que esta ley no se sancione, y que los obreros queden defraudados en sus esperanzas.

Sr. Dickmann. — Ya llegaremos también a ese punto, señor diputado.

Afirmo, pues, que no existe tal contrato de trabajo y que el único derecho que queda a la clase asalariada es el derecho de dejar de trabajar en un momento dado.

El derecho de huelga no quiere decir para nosotros el derecho de abandonar constantemente el trabajo, y deben notar los señores diputados que cuanto mejor organizada esté la clase trabajadora, cuanto más poderosos son sus sindicatos, cuanto más reconocidos

son los obreros en sus reclamaciones y en sus organizaciones por los poderes públicos, más grande es su responsabilidad y más difícil es que se declaren en huelga.

Las huelgas muy frecuentes entre los obreros desorganizados, se hacen difíciles, casi raras, en los gremios poderosamente organizados porque los patronos reconocen la fuerza obrera y tratan de arreglar sus diferencias antes de recurrir a la huelga; por eso el reconocimiento de la organización obrera por los poderes públicos es una garantía contra las huelgas, y así se explica que el poderoso gremio de maquinistas y foguistas se haya declarado tan raramente en huelga, teniendo una sola huelga en su haber, y eso después de agotar todos los recursos y todos los procedimientos.

El artículo 11 quita el derecho de huelga a los obreros porque establece que quedan cesantes por el hecho de abandonar voluntariamente el trabajo y voluntariamente lo abandonan los obreros cuando se declaran en huelga. Se les quita entonces el derecho de declararse en huelga.

Más; castiga este "delito" el artículo 11—y aquí el señor diputado Bas se ha equivocado—porque el artículo 11 les quita todo lo que han pagado hasta el momento de abandonar el trabajo. Un obrero que durante veinte años contribuye con el cinco o el tres por ciento a la formación de la caja pierde todo ese dinero por haber abandonado voluntariamente el trabajo, y la pérdida de ese dinero es un castigo real, es una multa; no podrá negarlo el señor diputado Bas.

Pero yo me explico muy bien en el señor diputado Bas, bajo el punto de vista en que él enfoca los asuntos sociales, bajo el punto de vista del partido y de la clase social que él representa, me explico muy bien que haya presentado las cosas en esta forma. Lo que no me explica es el punto de vista del señor diputado Araya, que ha pretendido o que ha querido hacer un verdadero equilibrio en la materia. Y es bueno que convenga al señor diputado Araya en que no siempre se pueden equilibrar las cosas. Yo me explico muy bien que ante la mesa de la cámara de diputados puedan presentarse dos de sus miembros del mismo partido radical para jurar uno por los santos Evangelios y el otro por la cons-

titución; así se queda bien con Dios y con el diablo (*crisus*); esto es una especie de equilibrio político; pero no se puede quedar bien equilibrado cuando se necesita declarar pública y categóricamente si los obreros de los ferrocarriles tienen derecho de declararse en huelga o si no tienen ese derecho. En este sentido, el señor diputado Araya, a pesar de toda la habilidad parlamentaria que le reconozco, ha debido decir que no tienen ese derecho. Se trata de un asunto en que es necesario dejar constancia clara y públicamente de que los señores diputados radicales,—no sé si todos, porque sólo uno ha hablado y no se ha producido todavía la votación,—hay que dejar constancia, digo, de que por lo menos el señor diputado Araya es enemigo de que los obreros de los ferrocarriles puedan declararse en huelga.

Sr. Araya (R.). — ¡Eso va por su cuenta, señor diputado!

Sr. Dickmann. — Eso ha dicho el señor diputado. Me alegraría que el señor diputado reconociera el derecho de huelga.

Sr. Araya (R.). — Yo he dicho otras cosas distintas, que he de poner en claro, lo que no hago ahora por no interrumpir la disertación del señor diputado por la Capital.

Sr. Dickmann. — Le agradezco.

El señor diputado habló contra las huelgas en general, e hizo el argumento de que ellas producen en seguida el fenómeno social de encarecer la vida, porque, según él, las huelgas aumentan los salarios, disminuyen la jornada de trabajo y encarecen la producción; y acto continuo los comerciantes y los industriales aumentan el precio de los artículos. Aparentemente, esta es una razón, pero es una razón con sin razón, es una especie de patológica, pero no es la lógica. Las huelgas se producen porque la vida encarece y no se encarece la vida porque se producen las huelgas. Pasa con este argumento exactamente como con la teoría de la renta. Hemos oído, y creo que en la misma honorable cámara se ha dicho, que si una propiedad vale tanto, debe producir cuanto de renta, razonamiento vulgar, porque se dice: esta propiedad me cuesta tanto y entonces debe producirme cuanto de renta; cuando el fenómeno económico es precisamente al revés: la propiedad vale tanto porque produce

cuanto de renta. Lo mismo sucede con las huelgas. Por factores de orden impositivo, por factores de mercado internacional se produce la carestía de la vida, y las huelgas no son sino un fenómeno de defensa del nivel de vida, del salario real, de la clase obrera.

En este sentido, el señor diputado Araya se ha equivocado completamente. No quiero extenderme mucho sobre las otras partes de la ley, que a mi modo de ver es completamente defectuosa.

Rechazo el argumento de que los socialistas, fácilmente contribuímos al fracaso de la ley. Las empresas quieren ahora que fracase la ley, y el poder ejecutivo también lo quiere, porque el señor ministro pedía su aplazamiento. sostener que los socialistas contribuímos a apoyar indirectamente a las empresas, será una argucia de abogado más o menos habil, porque nosotros nos hemos pronunciado en contra del artículo 11 desde el principio de la discusión. Este artículo no ha nacido en la cámara, sino en el senado, y la única voz socialista de aquel cuerpo se opuso a él con largos e ilustrativos discursos.

Ahora, como una concesión por haber introducido ese artículo, se ha establecido un simulacro de arbitraje, que califico como un verdadera bodrio, porque lo establecido no es arbitraje ni nada que se le parezca.

La única defensa que pueden tener los obreros y empleados de los ferrocarriles para que esta ley se cumpla, si algún día llega a sancionarse, es en su propia organización. Si nosotros quitamos a los obreros el derecho de organizarse, les quitamos lo fundamental de su defensa; y si nosotros quedemos dar en realidad una ley para que se cumpla, debemos asegurar la defensa del obrero, y vuelvo a repetir que esa defensa está en la organización de la clase obrera. Si mañana se dicta la ley, atando a los empleados y obreros de pies y manos, no pudiendo defenderse contra las empresas, las condiciones de trabajo van a empeorar, y como bien decía el señor diputado Zaccagnini, el 3 por ciento que se pretende imponer a las empresas lo van a pagar en último término los obreros, porque no pudiendo defender su salario, las empresas en seguida lo han de reducir en un 3 por ciento. Esto es tan claro como la luz del día.

Entonces, es necesario reconocer au-

pliamente el derecho de asociación y de huelga, que es un derecho reconocido por todos los países civilizados. Los gremios obreros no son asociaciones subversivas ni secretas; no caen bajo ninguna penalidad. Son organismos de bien público, porque bien público es la defensa de las condiciones elementales de vida y de trabajo. En este sentido es indispensable que no solamente la ley no les quite ese derecho, sino que les reconozca implícitamente el derecho de organizarse y de abandonar el trabajo cuando los obreros lo necesiten.

Yo comprendo, señores diputados, que una huelga de ferrocarriles es una cosa muy grave. Paraliza funciones e intereses que se relacionan con la colectividad; pero hay otras huelgas tan importantes que paralizan en el mismo grado la actividad nacional. Yo he visto en la Capital huelgas de carreros que han paralizado igualmente el movimiento de los frutos del país. Una huelga de estibadores del puerto equivale a una huelga de ferrocarriles. Hemos visto en el país dictar estados de sitio para reprimir huelgas de estibadores porque se decía que comprometían los intereses nacionales.

Hay, pues, muchas otras huelgas, que interesan a la colectividad entera. Aun más; yo diría que no hay una sola huelga, por mínima que sea, que no interese a toda la colectividad. Una huelga de panaderos interesa a toda la colectividad y perjudica hasta a muchos señores diputados que están acostumbrados a comer pan fresco todos los días...

No hay huelga que no esté vinculada a la colectividad entera. En tal caso, habría que prohibir o reprimir toda clase de huelgas, lo que es evidentemente un absurdo.

Es deseable que las huelgas no se produzcan y que en los grandes servicios públicos sean raras; pero eso debe surgir de las condiciones reales de trabajo. Si nosotros damos buenas condiciones de trabajo, excelentes salarios, jornadas humanas de trabajo y reconocemos las sociedades gremiales y todas las condiciones exigidas por el movimiento moderno de la clase obrera, estoy seguro de que se suprimirían en gran parte las causas de las huelgas.

El arbitraje podría intentarse en algunos servicios públicos; pero el arbitraje aplicado a los conflictos sociales es aún una cuestión a discutirse

en el mundo. Hasta en aquellos países en que se ha introducido como solución de los conflictos entre el capital y el trabajo, no se ha obtenido todavía una conclusión terminante, sobre su eficacia. En Nueva Zelanda, donde el arbitraje se ha introducido desde 1894 en forma inteligente—no como lo hace el artículo 11, que no significa tal arbitraje—donde se han establecido tribunales de conciliación compuestos de dos obreros y dos patronos nombrados por sus respectivos sindicatos y un quinto árbitro nombrado por los cuatro delegados, estos tribunales de conciliación no resuelven en última instancia: si las dos partes, o una de ellas, no aceptan la solución, la cuestión pasa a la corte de arbitraje, que está compuesta de un delegado nombrado por todos los sindicatos obreros del país, un delegado nombrado por todos los sindicatos patronales y por un funcionario nombrado por el poder ejecutivo, que suele ser generalmente un miembro de la suprema corte. Pero aun así la experiencia no se ha pronunciado sobre la eficacia del arbitraje. Hubo grandes huelgas en 1908 en Nueva Zelanda con el propósito de modificar todas las bases del arbitraje, lo que se ha conseguido en gran parte.

Sr. Bas. — Dice bien el señor diputado: ha fracasado completamente.

Sr. Dickmann. — No está demostrada su eficacia...

Sr. Bas. — Esta demostrada con huelgas cada año.

Sr. Dickmann. — ... e introducir un arbitraje como el del artículo 11 es complicar inútilmente, absurdamente, una ley o promesa de ley que no podemos aceptar en esta forma.

Para terminar, señor presidente, de claro que los socialistas, al votar la promesa de ley de jubilaciones, hemos votado por el principio del seguro social—no hemos querido obstaculizarlo ni por un solo momento;—pero no aceptamos renunciar a derechos de la clase obrera por la simple promesa de un proyecto de ley. Nosotros nos oponemos a este artículo 11 reivindicando para todos los empleados de los ferrocarriles el más amplio derecho de asociación y de huelga, que es la salvaguardia, en nuestro país, de los salarios y de las condiciones de vida de la clase obrera, que no tiene otra propie-

dad que su fuerza humana de trabajo.

He dicho.

Sr. de Tomaso. — Pido la palabra.

Sr. Presidente. — La había pedido antes el señor diputado Atencio.

Sr. de Tomaso. — Yo la había pedido antes, señor presidente, como puede verse en el diario de sesiones.

Sr. Presidente. — No lo he oído. Su pedido habrá sido para otra cuestión.

Sr. de Tomaso. — No, señor presidente; para este asunto.

Sr. Presidente. — Puede hacer uso de la palabra el señor diputado, porque no está presente en el recinto el señor diputado Atencio.

Sr. de Tomaso. — Los socialistas hemos hecho del artículo 11 nuestra disidencia fundamental con este proyecto de ley en revisión, que el señor diputado Dickmann acaba de calificar muy bien de "promesa de ley", expresando con eso, en una forma sintética y clara, el concepto que este proyecto nos merece y el carácter que reviste.

Yo quiero hacer al respecto algunas consideraciones, tomando por base el discurso pronunciado el otro día por el señor diputado Araya, quien trató de abordar la cuestión en sus términos más generales cuando dijo: "Quiero plantear, tal vez por primera vez, la cuestión huelgas en lo que se refiere a obreros ferroviarios en el parlamento argentino."

Debo empezar por recordar, señor, como un antecedente que tiene importancia práctica para el debate, la forma en que ha nacido este proyecto de ley. Fué presentado al congreso argentino sin que lo solicitaran los ferroviarios, a raíz de una gran agitación obrera. Fué necesario que los numerosos trabajadores de ese gremio se agitaran, después de una larguísima gestión amigable, con el fin de reclamar, cesando el trabajo, mejoras en sus salarios y en sus condiciones de labor, para que el parlamento argentino—que ha dictado una larga reglamentación de la ley de ferrocarriles, la cual versa sobre todo lo que puede tener atinencia con ese servicio, excepto el personal—para que el parlamento argentino, digo, por primera vez intentara siquiera tratar de los intereses ge-

nuinos, peculiares y propios de esa gran masa humana, sin cuya actividad continuada no se concibe el funcionamiento de un servicio público tan fundamental.

Ha nacido, pues, este proyecto de ley que discutimos y que pretende destruir la asociación y arrebatar el derecho de huelga a los ferroviarios, de una huelga, por así decirlo. El es la repercusión directa o inmediata de un gran conflicto que preocupó hondamente a la opinión pública durante casi tres largos meses y que mostró al mismo tiempo que la solidaridad de los trabajadores y el descuido de que habían sido objeto por parte de las empresas y del estado, la connivencia del estado con esas empresas para salvar sus intereses pecuniarios.

Decía el señor diputado Araya: "Nosotros hemos de votar por el artículo 11 porque no hay, en realidad, un derecho de huelga." Quería afirmar, con eso, que no estaba escrito en ningún texto legal, como no lo está en la carta fundamental nuestra.

Desde luego, surge ese derecho del otro mas fundamental, que ninguna constitución niega, que la nuestra ni siquiera reglamenta de una manera especial, pero que se sobrentiende, porque es la base misma del régimen republicano: el derecho de asociación. Ese derecho, que los obreros han logrado hacer reconocer en la realidad de las cosas, cuando reclaman mejoras en su situación y se imponen a la atención de los empresarios que usufructúan de su trabajo personal, se ha concretado ya en formulas jurídicas y legales, claras y terminantes, en países más progresistas que el nuestro, y donde se tiene en esta materia de ferrocarriles una experiencia social más vasta y amplia.

En los Estados Unidos está, en tesis general reconocido públicamente por el estado el derecho de huelga, por aquella disposición que ya se ha recordado aquí muchas veces, y que establece que las agencias públicas de colocaciones no puedan ofrecer trabajo para una empresa o para un establecimiento cuyos obreros se han declarado en huelga, sin anunciarlo así públicamente, para no fomentar la traición y la deslealtad. Y está, además, reconocido en textos expresos, algunos de los cuales me permitiré citar brevemente, como una contribución al

estudio de esta materia, y que los señores diputados pueden ver en dos grandes tomos del departamento de trabajo de los Estados Unidos, llegados recientemente, que condensan toda la legislación social que hay en aquella gran confederación.

En el estado de Delaware, desde el año 1893, se reconoce, en la sección primera de su código fundamental, el derecho de huelga, y sólo se obliga a los ferroviarios a conducir los trenes a su destino, antes de abandonar la locomotora; lo que, por otra parte, se sobreentiende, porque ningún obrero la dejaría abandonada en mitad del camino, exponiendo la vida de las personas que conduce.

En Nueva Jersey, el estatuto compilado del año 1910, en la sección 62, reconoce también el derecho de huelga, y lo mismo que el de Delaware, obliga a conducir las locomotoras al lugar de su destino.

En Pensylvania, desde el año 1894, se consagra el mismo derecho, en términos bien explícitos que vale la pena leer a la honorable cámara. Dice así la sección 72 del digesto de aquel estado: "Será legal para todo obrero u obreros, trabajador o trabajadores, empleado o empleados, ya sea individualmente o como miembros de una sociedad o asociación, rehusarse a trabajar para cualquier persona o personas cuando, en su opinión o en la de la sociedad o asociación, los salarios que les paguen sean insuficientes o los tratos recibidos sean ofensivos, o por el hecho de que la permanencia de determinadas personas sea contraria a la reglamentación o acuerdo de cualquier asociación a que él, ella o ellos pertenezcan, sin que las personas que se rehúsen a trabajar por esas causas puedan ser objeto de persecuciones por conspiración, de acuerdo con las leyes criminales de la república".

Y para no ser largo, no quiero referirme, señor presidente, a los numerosos proyectos de ley que hay en los parlamentos europeos, tratando de concretar en un texto jurídico la reglamentación y el reconocimiento de este derecho que existe en la realidad. Y no lo hago, porque aun cuando el derecho no estuviera escrito en ninguna ley, ni en ninguna constitución, es hecho, la realidad, es que a cada instante los trabajadores, cuando no consiguen de las empresas o de los patro-

nos que se atiendan sus aspiraciones legítimas, apelan a la huelga, como al único medio, como a la única arma positiva que, en el estado actual de las relaciones sociales, puede hacerles alcanzar, por lo menos, una parte mínima de sus reivindicaciones.

—Ocupa la presidencia el señor vicepresidente Ito. Doctor Manuel Mora y Araujo.

El derecho a la huelga existe, pues; existe en el hecho, y eso es lo que vale.

Es sabido, señor presidente, que la codificación, que el reconocimiento escrito de un derecho, viene siempre en retardo. Primero aparece el fenómeno social, el choque de los intereses, el hecho vivo, que choca, a menudo, con la costumbre y con algunos intereses creados. Luego viene, con la preocupación del legislador para encauzar las manifestaciones sociales dentro de la legalidad y del orden, el texto escrito, la codificación, que no es nada más que la cristalización, en normas jurídicas, de lo que ya existía en la palpitante realidad cotidiana.

Adujo el señor diputado Araya, como argumento impresionante, que la huelga ferroviaria tiene una característica propia que la distingue de cualquier otra huelga. No negamos eso, señor presidente; no negamos ni podemos desconocer lo peculiar del servicio ferroviario. Tráase, desde luego, de una industria de monopolio, que se ejerce en virtud de una concesión, de un privilegio otorgado por el estado, y que funciona obedeciendo a leyes y reglamentos que determinan todo su vasto y complicado proceso. Pero eso no implica que el personal, que el numeroso personal que esas empresas ocupan para atender su servicio, deba estar colocado en una situación completamente distinta respecto a los otros trabajadores, por lo que se refiere al empleo de ese medio de defensa y de elevación humana: la huelga, que la ley no ha creado, pero que la ley encuentra y tiene que respetar y reconocer.

No podemos admitir, decía el diputado Araya, la huelga para los empleados ferroviarios, con la misma amplitud que para los otros trabajadores, por la misma razón que no tienen las empresas la facultad de usar un medio que pueden utilizar los otros patrones con sus obreros, el lock-out: rehusar-

se a emplear su trabajo. Yo le interrumpí al señor diputado Araya en aquel momento de su exposición, trayendo al debate un recuerdo oportuno, sobre el cual quiero insistir ahora. Hay al respecto un antecedente nacional de importancia, aquel célebre decreto del 8 de enero de 1912, que el poder ejecutivo dictó en lo más álgido de la gran huelga, cuando por la solidaridad unánime de los trabajadores, cuando por su voluntad concorde, las empresas estaban a punto de capitular, concediendo mejoras en las horas de trabajo, en las condiciones de labor y en los salarios.

He dicho ya que las empresas ferroviarias tienen una característica propia: que están en una relación de dependencia con los poderes públicos, porque nacen en virtud de una concesión; porque ese poder les garantiza su monopolio y reglamenta su actividad, porque interviene en la fijación de las tarifas y de los horarios y porque esa industria no sufre la competencia que las otras empresas industriales y comerciales encuentran en su camino. La ley de ferrocarriles y el código de comercio les fijan, por eso, procedimientos ineludibles para el ejercicio de su gran función social.

Bien, señor presidente: cuando a quella huelga histórica estuvo a punto de arrebatarse al capitalismo ferroviario extranjero una parte, por lo menos, de lo que exigían los trabajadores, intervino el poder ejecutivo y les dijo a las empresas con aquel decreto famoso: "Decláranse suspendidas las obligaciones del servicio ordinario en todos los ferrocarriles nacionales". De tal manera que las empresas no tenían que ajustar desde ese momento su actividad a la ley de ferrocarriles, al reglamento de ferrocarriles y a las prescripciones claras y terminantes del código de comercio en la parte que regula y establece las obligaciones del cargador. Y era así como el poder ejecutivo por un simple decreto, por un acto de sumisión y de servilismo hacia el capital extranjero, derogaba la ley, el reglamento de los ferrocarriles y disposiciones fundamentales del código de comercio; sentaba una doctrina y reconocía un estado de cosas que estaba en contra de lo que la unánime jurisprudencia de los tribunales hasta ese momento había reconocido y establecido: quella huelga no podía ser invo-

cada por las empresas como causa de fuerza mayor, para eludir el cumplimiento de las obligaciones que les imponen las leyes, fundándose en que los conflictos con el personal son hechos inherentes a la existencia misma de las empresas, como el desgaste de las máquinas, por ejemplo que no son inevitables, que no surgen de improviso, sorprendiendo como un terremoto o cualquier otro cataclismo, sino que son hechos perfectamente previsibles y evitables, cuando no está en juego el egoísmo del privilegio, apoyado con toda la fuerza del poder público.

Insisto en ese antecedente que hace, por así decir, jurisprudencia en materia de elecciones entre empresas y trabajadores ferroviarios y entre las empresas y el estado, en nuestro país, porque eso muestra que el poder ejecutivo no se ha colocado frente al capitalismo ferroviario en la situación en que debe colocarse como representante de los intereses sociales, de los intereses generales, exigiéndole que cumpla siempre con todos sus deberes.

Quiere decir, entonces, que en la más importante huelga ferroviaria habida en nuestro país, el poder ejecutivo dió por decreto a las empresas ese derecho que el señor diputado Araya decía que no pueden ejercer: el de faltar a los mandatos de la ley y al cumplimiento del servicio público.

Decía el señor diputado Araya que en Europa se califica la huelga ferroviaria como un delito, y citaba disposiciones que pueden impresionar a los que no la examinen en todos sus detalles. Citaba, por ejemplo, las disposiciones de la ley inglesa de 1895 (no hay tal ley, es de 1875), que establece hasta pena de prisión para los que abandonan el trabajo en un servicio público en condiciones que pudieran implicar un peligro para la vida humana. Pero esas disposiciones, señor presidente, de la ley inglesa y de otras leyes que indicaba el señor diputado, no han sido bien citadas, porque la ley argentina tiene disposiciones más draconianas que esas y porque la ley argentina, lo mismo que su reglamentación, tiene capítulos penales especiales, como el título V, por ejemplo, que castigan duramente todo abandono del trabajo y negligencia que pueda significar un peligro para la vida de los

pasajeros, toda destrucción de materiales y hasta toda presión tendiente a hacer abandonar el trabajo.

Ya está, pues, reglamentado y limitado, por esas disposiciones, el derecho de huelga en la República Argentina, para los ferrocarrileros, considerado en su acepción más amplia. Los trabajadores de las otras industrias pueden abandonar su trabajo en cualquier estado, en cualquier momento o fase del proceso de producción; los albañiles pueden abandonar una obra en el cuarto piso, por ejemplo, los obreros de una usina pueden abandonar el trabajo, dejando una máquina a medio construir; pero los trabajadores ferroviarios, por las obligaciones que les imponen la ley y el reglamento vigente de los ferrocarriles, no pueden abandonar una locomotora en pleno campo, ni en una estación intermedia, sino que deben conducirla a los puntos de destino, de acuerdo con esas prescripciones terminantes. Ya hay, pues, para ellos una limitación, una reglamentación del ejercicio de la huelga, que los pone en una situación diversa con respecto al uso amplio y absoluto que de ese derecho de huelga pueden hacer los trabajadores de las otras industrias.

Decía el señor diputado Araya, por fin, que el artículo 11 debía votarse, porque esa era la voluntad de todo el gremio ferrocarrilero, y daba en apoyo de su aserto una cifra que nos asombró a muchos: 80.000 eran los hombres que reclamaban esta "promesa de ley" que tiene el detestable e inmoral artículo 11.

Le preguntamos al señor diputado Araya dónde están esos 80.000 hombres, dónde podrían estar, cuando la asociación ferroviaria más importante de la República Argentina, la que agrupa más de las tres cuartas partes del gremio de maquinistas y foguistas, se ha manifestado en absoluto desacuerdo con este artículo, que quiere quitar a los trabajadores el ejercicio de un derecho, del que no han hecho uso siempre, puesto que sólo han recurrido a él en casos extremos y excepcionales, impelidos por la intransigencia y el egoísmo de las empresas o por la ineptitud del poder ejecutivo.

Cuando el diputado Araya daba esa cifra, yo recordaba las condenaciones que siempre ha hecho el partido radical de los viejos escrutinios electorales, que él denomina escrutinios del régimen cuya característica ha sido siem-

pre el abultamiento de las cifras. Y me he preguntado si los radicales, que abominan de esos escrutinios en el orden político, no pretenden ahora restablecerlos al tratar de las cuestiones obreras. (Risas.)

¿Cómo se evita, señor presidente, la huelga de los ferroviarios? ¿Cómo se evita que los obreros y los empleados de este vasto mecanismo no se vean obligados a cruzarse de brazos, imposibilitando su funcionamiento y causando perjuicios sociales? Se evita desde luego, señor, dando a esos trabajadores, u obligando a las empresas a dar a esos trabajadores, condiciones de labor humanas, que pueden ser el desiderátum en un determinado momento de la vida social; condiciones de remuneración, de trabajo y de higiene que hagan inútil el ejercicio de aquel derecho tan fundamental. Y se evita también, con la adopción de prescripciones legales, bien inspiradas.

Y en esta materia, como en muchas otras, los representantes socialistas han aportado ya su contribución de pensamiento y de estudio al parlamento argentino.

Al tratarse en el mes de septiembre, del año 1911, el proyecto de ley autorizando a la compañía francesa de ferrocarriles de Santa Fe a construir varios ramales, el señor diputado Justo propuso un agregado que no se aceptó, agregado que ya había propuesto a la comisión de obras públicas cuando se consideraba la fusión de los ferrocarriles oeste y sud. Ese agregado en caso de ser convertido en ley, vendría a dar un medio de solucionar los posibles conflictos entre las empresas y sus obreros, de una manera amigable, evitando casi en absoluto la huelga.

Decía ese agregado, que quiero leer a la cámara en este momento, lo siguiente: "El directorio local de las empresas tendrá facultades plenas para resolver en los casos de pedidos de mejoras por el personal de empleados y de conflictos con ese personal. La empresa se obliga a aceptar el árbitro que eventualmente designe el poder ejecutivo de la nación, para resolver en caso de conflictos de las empresas con su personal."

Son estos medios los que han de evitar que se produzcan estos conflictos que tanto preocupan al señor diputado Araya y que no pueden ser impedidos

arrebatando un derecho, porque con eso no se conseguiría sino agriar los ánimos, cavar más hondo las disidencias de clases y preparar dolorosos y trágicos estallidos futuros.

Los obreros, si se les impide o coarctar el ejercicio de ese derecho, han de volver a la conquista de él, porque lo necesitan para poder tener una garantía superior que los ponga a cubierto de las represalias, del egoísmo y de la avaricia de las empresas.

En la actualidad, señor presidente, tenemos en la República Argentina esta situación ingrata, por cierto; si el personal de una empresa se ve obligado con razón a reclamar condiciones de trabajo distintas, no puede tratar con el directorio local, compuesto de personas que tienen una impresión viva y directa de las necesidades locales, de personas que saben, por ejemplo, cuál es el costo de vida, cuáles son las características propias del ambiente, y que se hallan por eso en condiciones de resolver el problema planteado por los trabajadores. Esos directorios locales son simples fantoches cuando de estas cuestiones se trata, y se escudan diciendo que carecen de facultades, que no tienen instrucciones, y que deben consultar siempre, previamente, al lejano e invisible directorio de Londres, para el cual la única y exclusiva preocupación es la libra esterlina, el dividendo, y no la salud y la vida del enorme personal que está radicado en la República Argentina y que contri-buye a formar el cuerpo de la patria.

Y nosotros, a quienes a menudo en esta cámara, sin razón, se nos moteja, señor presidente, de antipatriotas, queremos ver en la legislación positiva de nuestro país establecido un precepto que haga comprender a los directorios extranjeros que el país no está con respecto a las empresas ferroviarias, cuando se trata de las grandes cuestiones públicas, en una situación de tutela o de dependencia; que para todo lo que se refiera a las condiciones de trabajo de su numeroso personal, los únicos que deben tratar con él, porque están en mejor situación para hacerlo, son las personas que constituyen el directorio local.

Y el poder ejecutivo debe tener también facultades para imponer un arbitraje leal, sin que las empresas pue-

dan sentirse o creerse vulneradas en su libertad, por la sencilla razón de que ellas, como he dicho, nacen de una concesión del poder público, que les otorga un monopolio y lo garantiza contra la competencia.

El artículo 11, pues, señor presidente, de esta "promesa de ley" es un artículo que les quita a los trabajadores lo único que ahora tienen: la posibilidad, la eventualidad de usar de la asociación firme y solidaria para defenderse contra las arbitrariedades de las empresas.

Por todas estas consideraciones, nosotros creemos que la cámara debe insistir en la sanción anterior.

¡Qué importa que se demore un poco el trámite de la ley! Si esta ley no sale del parlamento argentino sin el artículo 11, quiere decir que la voluntad que ha presidido a su confección y gestación es una mala voluntad, señor presidente. Quiere decir que con ella lo único que se quiere es tener un medio legal para destruir la asociación de los trabajadores ferroviarios y para impedir que ellos, colocados en el caso extremo de defender su salud y su vida amenazadas por las malas condiciones de trabajo, se encuentren maniatados ante el peligro de perder la jubilación y las sumas deducidas de sus salarios.

La única vez que el congreso argentino pretende hacer algo de su propia voluntad, espontáneamente, en favor de los trabajadores, lo hace en esta forma tan estrecha y tan egoísta, viciando su propia labor, quitándole todo prestigio y presentando esta ley, a la opinión pública, a la opinión de los trabajadores conscientes, rodeada de una atmósfera de desconfianza que tiene que hacerla por eso mismo antipática y estéril.

He terminado.

Sr. Araya (R.). — Pido la palabra.

Sr. Presidente. — Permítame, el señor diputado; la secretaría me informa que no hay número en la casa; entonces sería el caso de suspender la discusión, quedando con la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Invito a la cámara a pasar a cuarto intermedio.